

ÍNDICE AI: ASA 21/11/98/s
18 DE FEBRERO DE 1998

Indonesia: cientos de detenidos, ¿cuál es el precio de la estabilidad económica?

En las dos últimas semanas han sido detenidos en Indonesia más de 250 activistas políticos pacíficos, pero otros gobiernos hacen caso omiso de esta renovación de las medidas represivas contra quienes se oponen al régimen o a su política económica, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

«Los líderes mundiales deben utilizar su influencia no sólo para presionar a Indonesia a fin de que introduzca reformas económicas, sino también para que se ponga fin a las medidas represivas que emplean las autoridades contra su propia población», ha pedido la organización.

Entre los detenidos figuran partidarios de que el presidente Suharto no se presente a la reelección en el cargo, en lo que sería su séptimo mandato, en las elecciones presidenciales de marzo de 1998. Al menos 20 miembros de la organización Alianza Democrática del Pueblo (*Aliansi Demokrasi Rakyat - Aldera*) han sufrido breves periodos de detención; cuatro han sido procesados. Además, existe honda preocupación por la seguridad del secretario general de Aldera, Pius Lustrilanang, en paradero desconocido desde principios de febrero, y del que se teme pueda estar detenido en régimen de incomunicación. Aldera apoya una coalición presidencial de Megawati Sukarnoputri, ex dirigente del Partido Democrático del Pueblo, destituido en un congreso respaldado por el gobierno en 1996, y Amien Rais, jefe del grupo musulmán Muhammadiyah.

Ciento veintiocho partidarios de Megawati siguen detenidos en Yakarta, tras manifestarse el 11 de febrero contra la subida de los precios, el aumento del desempleo y la corrupción gubernamental. Según algunas fuentes, cinco de los detenidos podrían ser acusados formalmente en aplicación de la Ley Antisubversión, ampliamente utilizada en Indonesia para encarcelar a opositores del gobierno y que conlleva la imposición como condena máxima de la pena capital. Los restantes 123 detenidos afrontan condenas de cinco años de cárcel.

«Las autoridades indonesias tienen una política de nula tolerancia cuando afronta críticas al régimen o a su política -declaró Amnistía Internacional-. La estabilidad económica no debe obtenerse a costa de la libertad individual».

Los disturbios desencadenados por la subida de los precios de los alimentos y del combustible se han extendido en toda Indonesia en las últimas semanas, aumentando las tensiones en el país. Las primeras impresiones de moderación por parte de las fuerzas de seguridad al hacer frente a los disturbios fueron sustituidas por el temor de que se produzcan violaciones graves de derechos humanos, después de saberse que 5 personas murieron por disparos y otras 15 resultaron heridas al abrir fuego las fuerzas de seguridad contra los amotinados el pasado fin de semana.

«Las fuerzas de seguridad indonesias no cuentan con buenos antecedentes en lo que respecta a su modo de controlar los disturbios, tanto pacíficos como violentos, a pesar de lo cual los gobiernos extranjeros han seguido vendiéndoles armas que se utilizan contra la población civil», ha manifestado Amnistía Internacional.

«Ahora esos gobiernos tienen la responsabilidad de supervisar el uso del equipo que han vendido y de presionar a las autoridades indonesias para que actúen con moderación al controlar tanto las manifestaciones pacíficas como los disturbios», añadió la organización.